

Visto el juicio de amparo promovido ante el juzgado de Distrito de Guadalajara, por el reo Pantaleon Campos contra la sentencia de muerte pronunciada en su contra por el juzgado de 1ª instancia de Colima, alegando: que se han violado en su persona las garantías que otorgan los artículos 23, 126, y algunas de las que contiene el título 1º de la sec. 1ª del código de 1857. Vistas las constancias de autos, y

Considerando: que el juzgado 1º de 1ª instancia de Colima ha obrado con total arreglo á la ley de 21 de Marzo de 1868, expedido por la legislatura del Estado, sin que este hecho importe violacion alguna de las garantías consignadas en el escrito de demanda, con tales fundamentos, se decreta:

Que es de revocarse y se revoca la sentencia pronunciada por el juzgado de Distrito de Guadalajara, que concedió el amparo á Pantaleon Campos, y se declara:

Que los supremos poderes de la Union no amparan ni protegen al peticionario, contra la sentencia pronunciada en su contra por el juzgado de 1ª instancia de Colima.

Devuélvanse las actuaciones al juzgado de su origen con testimonio de este fallo para los efectos consiguientes; publíquese y archívese á su vez el toca.

Así lo decretaron por mayoría de votos los ciudadanos Presidente y Ministros que formaron el tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos y firmaron.—*S. Lerdo de Tejada.*—*Pedro Ogazon.*—*Juan J. de la Garza.*—*J. M. Lafragua.*—*José Arteaga.*—*Pedro Odráz.*—*M. Auza.*—*S. Guzman.*—*Luis Velazquez.*—*M. Zavala.*—*José García Ramírez.*—*Luis M. Aguilar,* secretario.

Son copias que certifico. México, Diciembre treinta de mil ochocientos setenta y uno.—*Lic. Agustin Peralta,* oficial mayor.

## AMPARO.

*Juicio promovido ante el juzgado de Distrito de Tabasco por Julian Mateos y Felipe Gonzalez contra el ciudadano coronel Eusebio Castillo que lo redujo á prision.*

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

C. Juez de Distrito.

El fiscal dice: el juez de 1ª instancia de la Chontalpa afirma en su informe del día 18 último, que los C.C. Juan Mateos y Felipe Gonzalez, no han sido puestos á su disposicion y por consiguiente que no les instruye causa por delito alguno; resultando sin embargo cierto, que el día 11 de Agosto, el ciudadano coronel Eusebio Castillo, condujo de San Antonio de Cárdenas á la villa de Cunduacan algunos presos que depositó en la cárcel pública de dicha villa entre los que en concepto del Fiscal se encuentran los indicados Mateos y Gonzalez, que el coronel Castillo aseguró á ese juzgado de distrito haber puesto á disposicion del juzgado de primera instancia de la Chontalpa, como presuntos reos del delito de homicidio.

Puestos así en claro los hechos, resulta de una manera clara y positiva, que el ciudadano coronel Castillo ha violado las garantías que otorgan al hombre los artículos 16 y 19 de la constitucion federal de 1857 al reducir á prision á dichos ciudadanos sin haber obrado con autorizacion competente, sin motivo justificado y sin consignar los presos á su juez natural, si es que están inodados en alguna responsabilidad criminal.

Pero como no han sido sometidos dichos ciudadanos á juez alguno, ni se ha iniciado la respectiva averiguacion en que les resulte cargo alguno, no puede decirse violadas las garantías de las fracciones primera y segunda del artículo 20 de la misma constitucion federal.

Entre los casos en que tiene lugar el amparo de la justicia de la Union, segun la ley orgánica de 20 de Enero de 1869, está el de la violacion de las garantías individuales á que se refiere la fraccion primera artículo primero de la expresada ley.

El artículo 101 de la constitucion general establece la competencia de los tribunales federales para conocer de las controversias que suscitan por leyes ó actos de *cualquier autoridad* que violen las garantías individuales, sin que ni por las fracciones segunda y tercera del mismo artículo, ni por el espíritu del artículo 102 en que se especifican los efectos que deben producir los juicios á que se contrae el anterior ni por los demás preceptos del código federal, se puede inferir con claridad, que los actos judiciales que violen las garantías deben exceptuarse de la accion benéfica y justa de los juicios de amparo, porque seria hacer del poder judicial un poder superior á la constitucion, y proclamar de un golpe la infalibilidad de los jueces que como hombres estan sujetos á los errores y aberraciones á que está expuesta la humanidad entera.

La constitucion federal es la suprema ley, la ley augusta superior á todas las leyes y que debe servir de base á los actos y procedimientos de las autoridades y tribunales de la República, sin mas excepciones que las que pudieran establecer las leyes que de ella emanen y los tratados con las naciones extranjeras siguiendo la letra del artículo 126 de la misma constitucion, y la reproduccion del artículo 28 de la ley orgánica antes citada de 1869.

El coronel Castillo no puede por tanto cohonestar sus actos bajo la ejida del artículo octavo de dicha ley, porque siendo contrario al código federal, no puede observarse sin infringir esta, lo cual no es debido.

Mas aun dado caso que el ciudadano juez tuviese á bien observar dicho artículo, los quejosos Mateos y Gonzalez no han sido sometidos á juez alguno ni se ha iniciado

procedimiento que se pueda calificar de estrictamente judicial, pues su aprehensor no es juez, ni obró por orden de juez alguno.

En mérito de estas conclusiones el fiscal tiene el deber de pedir:

Que el juzgado ampare y proteja á los CC. Julian Mateos y Felipe Gonzalez, por haberse violado en sus personas las garantías de los artículos 16 y 19 del código federal, mandándose que en el acto sean puestos en libertad absoluta.

San Juan Bautista, Setiembre veintidos de mil ochocientos setenta y uno.—*Lic. P. Rosado.*

#### *Sentencia del C. juez de Distrito.*

República Mexicana. Juzgado de Distrito de Tabasco.

San Juan Bautista, Octubre veintiocho de mil ochocientos setenta y uno.

Visto el ocurso presentado en 5 de Setiembre último por los CC. Julian Mateos y Felipe Gonzalez, solicitando amparo contra la prision á que fueron reducidos por orden del ciudadano coronel Eusebio Castillo: el informe de este funcionario en que asegura que á su llegada á Cárdenas ya encontró presos á los mismos individuos y que contra ellos se corrian diligencias, como presuntos cómplices de la muerte violenta del C. Ricardo Valdivieso, y que en cumplimiento de instrucciones superiores, no hizo mas que trasladarlos á la cárcel de Cunduacan, en donde quedaron á disposicion de la autoridad competente; el que á mayor abundamiento y á peticion fiscal se recabó del ciudadano juez de primera instancia de la Chontalpa, el cual declara no saber nada sobre la prision de los peticionarios, y ni aun manifiesta que esten presos, ofreciendo sí que pedirá al juzgado primero de paz de Cárdenas las diligencias sobre el caso de Valdivieso, sin que hasta ahora haya comunicado el resultado; visto

por último lo pedido por el ciudadano fiscal y

Considerando: que no habiéndose hasta hoy comprobado la exactitud de las circunstancias referidas en el informe del citado coronel Castillo, no hay duda que se han violado en las personas de los promoventes los artículos 16 y 19 del código fundamental, y que por lo tanto se hallan comprendidas en la fracción primera artículo primero de la ley de 20 de Enero de 1869; pero á la vez teniendo presente que esta falta de comprobación puede provenir de negligencia ú omisión de parte del juez de Cárdenas y por no haber dado cuenta al de primera instancia de Chontalpa de los procedimientos respectivos, ó de parte de éste, en no haber solicitado los informes necesarios al rendir el suyo á este juzgado, el mismo tiene por conveniente fallar:

Primero; la justicia de la Union ampara y protege á los CC. Julian Mateos y Felipe Gonzalez contra la providencia del ciudadano coronel Eusebio Castillo que los redujo á prision.

Segundo; requiérase por la provision correspondiente al ciudadano juez de primera instancia de Chontalpa para que en la brevedad posible dé cuenta con el resultado de la nota que segun ofrece en su informe iba á dirijir á la autoridad de Cárdenas y acumúlese su contestacion á estas diligencias, para que con su vista la superioridad determine lo que estime en justicia.

Tercero; en consecuencia demórese la remision de estas á revision, hasta recibir dicha contestacion, pues que las circunstancias particulares del caso obligan á obrar de esta manera. Lo proveyó, mandó y firma el C. Lic. Limbano Correa, juez de Distrito del Estado, por ante mí su escribano que doy fé.—*Limbano Correa.*—Ante mí *Gabriel Sosa.*

### *Ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia.*

México Diciembre veintisiete de mil ochocientos setenta y uno.

Visto el juicio de amparo promovido ante el juzgado de Distrito de Tabasco por Julian Mateos y Felipe Gonzalez contra el C. coronel Eusebio Castillo que los redujo á prision,

Considerando: que en virtud de no aparecer al tiempo en que se dictó la sentencia de amparo, pronunciada por el juez de Distrito de Tabasco, que los quejosos estuvieran legalmente presos, fueron amparados por dicha sentencia: que despues de pronunciada esta se recibió y agregó al expediente el oficio del juzgado de primera instancia de la Chontalpa fecha 16 de Noviembre próximo, en el que aparece que en 3 de Octubre último se dictó contra los quejosos el auto de bien presos; y que de ahí resulta, que no se han violado en las personas de ellos las garantías que invocan; se decreta: que se reforma la sentencia pronunciada el 28 de Octubre último por el juez de Distrito de Tabasco que otorgó el amparo, y se declara que la justicia de la Union no ampara ni protege á Julian Mateos y Felipe Gonzalez contra el acto en virtud del cual han sido reducidos á prision.

Devuélvanse sus actuaciones al juzgado de que proceden con copia certificada de esta sentencia para los efectos consiguientes; publíquese por los periódicos y archívese á su vez el toca.

Así lo decretaron por unanimidad de votos los CC. Presidente y Ministros que formaron el tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos y firmaron.—*S. Lerdo de Tejada*—*Pedro Ogazon*—*Juan J. de la Garza*—*José Arteaga*—*J. M. Lafragua*—*S. Guzman*—*L. Velazquez*—*M. Zavala*—*José García Ramírez*—*Luis M. Aguilar*, secretario.

Son copias que certifico. México, Diciembre treinta de mil ochocientos setenta y uno.—*Lic. Agustín Peralta*, oficial mayor.

## AMPARO.

*De garantías, promovido ante el juzgado de Distrito de Guanajuato por varios vecinos de Coronéo, contra la providencia que dictó el ayuntamiento de Terécuaro, por la que se mandó llevar adelante la reparación de la presa de este pueblo.*

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

C. juez de Distrito.

El promotor fiscal dice: que en su pedimento de 25 de Octubre anterior, manifestó al juzgado su parecer, sobre que, resuelto en este juicio el punto de suspensión de la obra de la presa, de la que los solicitantes se titulan dueños, debía considerarse el recurso interpuesto sin objeto alguno: la razón es, que no quejándose los promovedores de ocupación de su propiedad, ni de otro acto cualquiera cuya reparación ó suspensión pudiera hacer este juzgado, los perjuicios originados por la obra terminada no pueden reclamarse ni resarcirse por un tribunal de la federación, ni menos en un recurso de la naturaleza del que se trata en estas actuaciones.

En esta convicción, el promotor fiscal debía limitarse á pedir á vd. diera por terminado el juicio, previniendo á los interesados ocurrieran á hacer valer sus derechos en la vía y forma que correspondiese; no obstante, como pudiera suceder que siendo los exponentes dueños de la presa, considerasen comprendido su caso en la parte 1.<sup>o</sup> art. 16 de nuestro pacto federal, el funcionario que suscribe proseguirá en el juicio hasta obtener definitivamente sobre lo principal.

Considerando el caso, y formando juicio de él por las exposiciones y datos que presentan, tanto los interesados como la autoridad que el juzgado creyó responsable, el promotor fiscal no duda de que los vecinos de Coronéo que suscriben la iniciación de este juicio, no son dueños individualmente de la presa en cuestión, y si esto es así queda en ellos destruida por su base el derecho que creen tener para pedir amparo contra la obra de reparación que se ha hecho en la misma presa.

En efecto del escrito de los solicitantes, así como de los informes rendidos por el síndico de Coronéo, se deduce que el pueblo posee la presa en común, y que esta sirve de regadío á los campos inmediatos, de manera que si así fuere como se presume con buen fundamento, es incuestionable el derecho de sobrevigilancia de reparación y conservación que tienen las autoridades municipales sobre aquella obra, que por su origen, si fuese el mismo síndico puede considerarse aun como de propiedad del mismo ayuntamiento.

En el supuesto anterior, tampoco han recibido los vecinos ofensa, porque el síndico de Coronéo haya concurrido á la obra con un piquete de fuerza armada, pues nadie puede disputar á las autoridades, no ya el derecho sino la obligación que tienen de imponer á los perturbadores del orden, y hacerse de los medios que sean necesarios para reprimirlos.

Lo dicho parece bastante para que este juzgado venga en conocimiento, de que no ha habido violación alguna de garantías que perjudique á los vecinos de Coronéo por el acto de reparación de una presa del común del pueblo, que el funcionario público de quien se quejan llevó á cabo por acuerdo del ayuntamiento del mismo pueblo.

No será fuera del caso llamar la atención del juzgado sobre el hecho de la suplantación de firmas y de nombres que aparece justificado tan plenamente con la manifes-